

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 17. Marzo de 2021

Auto Interlocutorio No. _____

CONJUEZ PONENTE: JOSE EUSEBIO MORENO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76001-23-33-007-2016-00241-00
DEMANDANTE:	GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
DEMANDADO:	NACIÓN - RAMA JUDICIAL
ASUNTO	CONCEDE RECURSO APELACIÓN

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

La apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial - DESAJ, mediante escrito visible a folios 11 a 12 del cuaderno No. 2, interpuso recurso de apelación contra el auto del 01 de marzo de 2019, por medio del cual se negó el llamamiento en garantía formulado contra la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Al anterior recurso se le corrió traslado por el término de tres (03) días, de conformidad al numeral 2 del artículo 244 del CPACA, dentro de dicho término la parte demandante no presentó ningún escrito.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

El artículo 243 del CPACA, dispone que frente a la apelación del auto que niega la intervención de terceros, se concederá en efecto devolutivo, el artículo 226 ibídem, señala que el auto que niega en primera instancia dicha intervención es apelable en efecto suspensivo, situación que refleja una clara contradicción, la cual fue analizada por el Consejo de Estado, en auto de Unificación Jurisprudencial del 25 de junio de 2014, radicado 25000-23-36-000-2012-00395-01 (49.299) Consejero Ponente Enrique Gil Botero, precisó:

“(…) Ahora bien, existen preceptos o normas especiales en el mismo CPACA a través de las cuales es viable predicar la existencia de autos apelables – proferidos por los Tribunales Administrativos en procesos de primera instancia – por fuera del listado establecido en el artículo 243, tal y como ocurre con la decisión que resuelve la intervención de terceros en el proceso o el auto que resuelve las excepciones previas. En efecto, los artículos 226 y 180 ibídem, puntualizan:

(…)



Existiría una antinomia en relación con la decisión proferida por los Jueces Administrativos, puesto que mientras el artículo 226 del CPACA permite que se apelen todos los autos que resuelven la intervención de terceros sin importar si la niegan o la conceden, así como regula los efectos –devolutivo si la acepta y suspensivo si la niega– en que habría de concederse el citado recurso, el numeral 7 del artículo 243 ibídem, restringe la apelación al auto que “niega la intervención” y, de otra parte, señala de manera general que el efecto en que se concederá en el efecto devolutivo.

Por lo tanto, corresponde a la Sala definir si el artículo 243 del CPACA es un precepto taxativo en cuanto se refiere a la procedencia del recurso de apelación de los autos proferidos en el trámite de la primera instancia o, si por el contrario, normas como las de los artículos 226 y 180 de la misma codificación priman y, por ende, si permiten ampliar la gama de proveídos apelables establecidos en la primera disposición comentada.

Sobre el particular, es preciso señalar que el legislador limitó la apelación de los autos proferidos por los tribunales, con la finalidad de restringir la competencia del Consejo de Estado en materia de decisiones interlocutorias, máxime si se tiene en cuenta que las disposiciones contenidas en la ley 1437 de 2011, persiguen el objetivo o tienen como finalidad la descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, por lo tanto, simplificar procedimientos que no impliquen el desconocimiento de las garantías procesales.

No obstante lo anterior, es evidente que el legislador incluyó o introdujo algunas normas especiales que, de manera particular, establecieron la procedencia del recurso de apelación contra específicas decisiones interlocutorias, a modo de ejemplo y de forma enunciativa, huelga citar las siguientes: i) la que decide las excepciones previas (art. 180), ii) el auto que resuelve sobre la intervención de terceros (art. 226), y iii) el que decreta una medida cautelar (art. 236).

(...) Ante estos problemas hermenéuticos derivados de las antinomias normativas, el legislador dictó algunas reglas para solucionarlos, contenidas principalmente en las leyes 57 y 153 de 1887 que establecen los siguientes criterios: (i) *lex superior derogat inferiori* (la ley superior deroga a la inferior): este criterio refleja el principio de jerarquía normativa que informa la conformación de los ordenamientos jurídicos, pues determina que ante un conflicto entre normas de diferentes niveles jerárquicos, prevalecerá aquella que se ubique en el eslabón más alto, de conformidad con el entendimiento tradicional de la graduación normativa: Constitución, Ley y Reglamento. (ii) *lex posterior derogat priori* (ley posterior deroga a la anterior): regla que pone el acento en el tiempo de expedición de la norma, se trata de un criterio cronológico, que privilegia la aplicación de la disposición promulgada con posterioridad. Finalmente, (iii) *lex specialis derogat generali* (ley especial deroga la general): este criterio privilegia el contenido de la norma, así, cuando el conflicto se plantea entre una norma de carácter general y una especial, se aplicará ésta.

En este orden, el artículo 5 de la ley 57 de 1887, que subrogó el artículo 10 del Código Civil, consagra lo siguiente:

“Artículo 5. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.

“Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

“1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-007-2016-00241-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
: GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
: NACIÓN - RAMA JUDICIAL



3

"2ª. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública." (Negrillas adicionales).

Obsérvese que la norma, además de consagrar los criterios de solución de antinomias antes reseñados, introduce una regla diferente, aplicable cuando el conflicto de normas se presenta entre dos disposiciones del mismo carácter y naturaleza que se encuentran en una codificación. Se trata de una sub especie del criterio cronológico, esto es, que la norma posterior deroga la anterior; sin embargo, no puede entenderse en los estrictos términos de aquél, comoquiera que si bien, los artículos de un código se expiden al mismo tiempo, sí tienen un orden y una numeración, lo que permite establecer que, frente un conflicto de disposiciones de un código, prevalecerá la consignada en un artículo o disposición posterior, salvo que el asunto esté contenido en un acápite o capítulo especial que regule el asunto de manera distinta (v.gr. artículo 180 CPACA) a los postulados generales (v.gr. artículo 243 CPACA). (Negrilla fuera de texto)

En acopio de lo anterior, en aplicación de la norma especial (artículo 226 del CPACA en concordancia con el artículo 243 ibídem) y como quiera que el recurso interpuesto cumple con los requisitos consagrados en el numeral 2 del artículo 244 ibídem, el Despacho procederá remitir el expediente en el efecto suspensivo al superior para que conozca sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 01 de marzo de 2019, por medio del cual se negó el llamamiento en garantía formulado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial contra la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En consecuencia; se,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONCEDER ante el Consejo de Estado y en el efecto **SUSPENSIVO**, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 01 de marzo de 2019, que negó el llamamiento en garantía formulado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial contra la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública, proferido por esta Corporación.

SEGUNDO.- En firme el presente proveído, remítase el expediente al superior para que se surta la alzada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOSE EUSEBIO MORENO
Magistrado